

Santiago, uno de diciembre de dos mil veintitrés.

Vistos:

En estos autos N° 2.182-1998, de la Corte de Apelaciones de Santiago, denominados “Pisagua: Manuel Sanhueza Mellado”, por sentencia de primera instancia, de veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho, escrita de fojas 2.524 y siguientes, pronunciada por el señor Ministro en Visita Extraordinaria don Mario Carroza Espinosa, se absolvió a Enrique Fuenzalida Puelma de la acusación deducida en su contra como autor del delito de secuestro calificado en la persona de Manuel Sanhueza Mellado, perpetrado el mes de julio de 1974, en las ciudades de Arica y Pisagua.

La misma sentencia condenó a Luis Guillermo Carrera Bravo y Manuel Caballero Villanueva a la pena de quinientos cuarenta días de presidio menor en su grado mínimo como autores del delito de secuestro en la persona de Manuel Sanhueza Mellado, cometido el 10 de julio de 1974, en la ciudad de Arica.

En el aspecto civil, condenó al Fisco de Chile a pagar a Cecilia Linoska Rojas Orellana, Gladys Sanhueza Mellado y Olivia Rosa Sanhueza Mellado, cónyuge y hermanas de la víctima, respectivamente, la suma de \$50.000.000 a cada una de ellas, con los reajustes e intereses dispuestos en dicho laudo.

Impugnada dicha decisión por la vía de la apelación, la Corte de Apelaciones de Santiago, por sentencia de veintiocho de julio de dos mil veinte, escrita a fojas 2.846 y siguientes, confirmó en lo apelado y aprobó en lo consultado el fallo de primer grado, con declaración que la decisión de absolución lo fue en relación al delito de secuestro calificado establecido en el artículo 141 del Código Penal. Asimismo, elevó la condena al encausado Caballero Villanueva —



quien falleció el 22 de agosto de 2022—. En el aspecto civil confirmó la sentencia de primera instancia, revocando únicamente la condena en costas, por estimar que el Fisco tuvo motivo plausible para litigar.

En contra de este último fallo, la parte querellante recurrió de casación en la forma respecto de su capítulo civil, recurriendo de casación en el fondo en contra de su aspecto penal, según se lee a fojas 2.857, en tanto que, la Unidad Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos —en adelante, el Programa— y el Consejo de Defensa del Estado, recurrieron de casación sustancial, según se lee de sus presentaciones que obran a fojas 2.876 y 2.883, respectivamente.

Por dictamen de veinte de octubre de dos mil veinte, escrito a fojas 2.929, se trajeron los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que, el recurso de casación en la forma propuesto por la parte demandante civil se funda en la causal de invalidación prevista en el artículo 541, N° 9 del código de enjuiciamiento criminal, en relación a lo dispuesto en el artículo 170, N° 4 del Código de Procedimiento Civil, esto es, la falta de consideraciones de hecho y derecho en que se funda la sentencia, refiriendo que el fallo carece de las consideraciones de hecho y fundamentos de derecho que justifiquen la decisión de mantener la indemnización otorgada en primera instancia, por concepto de daño moral sufrido por las demandantes, no explicando las razones para confirmar el fallo del *a quo*.

Agrega que, la sentencia que impugna no expresa las razones de cómo se llega a la conclusión que, la indemnización concedida por el sentenciador de



primer grado debe mantenerse, ni los motivos para desechar los argumentos contenidos en la apelación para proceder a aumentarlo, por lo que solicita invalidar la sentencia en este acápite y se dicte sentencia de reemplazo que otorgue la suma demandada, más reajustes o intereses o se dicte otra, conforme al mérito del proceso.

Segundo: Que, enseguida, la parte querellante recurrió de casación sustancial en contra del capítulo criminal del fallo de segunda instancia, fundando el arbitrio en la causal contenida en el artículo 546, N° 7 del código adjetivo, denunciando como infringido el artículo 488, sus numerales 1° y 2° del mismo compendio legal, en relación con los artículos 15 y 141 del código de castigo.

Expone que la sentencia que impugna omitió la valoración de un conjunto antecedentes probatorios, ponderación que habría llevado, inequívocamente, a la decisión de revocar el fallo de primer grado en aquella parte que absolvió al acusado Enrique Fuenzalida Puelma y, consecuencialmente, declararlo culpable de los cargos formulados en su contra.

Sostiene que, el fallo de primer grado, decidió absolver a Fuenzalida Puelma de su participación en los delitos de secuestro, traslado y homicidio de la víctima, sobre la base de la falta antecedentes concluyentes reunidos a lo largo de la investigación, sin embargo estima que los sentenciadores del fondo omitieron un conjunto de antecedentes que obran en autos y que sirven para acreditar su participación en el delito de secuestro calificado.

Afirma que Fuenzalida Puelma, abogado, Fiscal Militar del Ejército y de Carabineros, se desempeñaba como integrante de la unidad operativa de inteligencia en la ciudad de Arica, en su calidad jerárquica de Fiscal Militar,



especialmente enviado a dicha ciudad para investigar a los opositores políticos, manteniendo una posición de mando en el Servicio de Inteligencia Militar, con una destacada participación en la represión ejercida en ese lugar, en contra de los militantes de los partidos de la Unidad Popular.

Refiere que la sentencia de segundo grado, no considera los múltiples testimonios y antecedentes que cita, de los cuales aparece de manifiesto su participación en el delito de secuestro, vulnerándose con ello las normas ya referidas, presunciones judiciales que resultan clave y que permiten invalidar la sentencia de segunda instancia con la finalidad de condenarlo. Fuenzalida Puelma fue enviado a dicha ciudad en calidad de Fiscal Militar con el objeto de materializar operaciones judiciales operativas y represivas, disponiendo de la colaboración del Servicio de Inteligencia Militar de dicha ciudad, integrado por el sentenciado Manuel Caballero y por el resto de los procesados y encausados, además del oficial Armando Fernández Larios.

Expresa que, tanto la víctima, como su familia, fueron detenidos y llevados al Regimiento Rancagua de la ciudad de Arica, lugar en el que fueron torturados. En dicho lugar, el encausado interrogó a Sanhueza Mellado, a su cónyuge y familiares, encontrándose en posición de garante frente a la víctima, autorizando su traslado, el de su suegro y de su concuñado hacia el campamento de prisioneros de Pisagua, traslado efectuado por los propios miembros del Servicio de Inteligencia Militar y, pese a que declaró jamás haber oído el nombre de Sanhueza Mellado, procede el 3 de octubre de 1974 a comunicar a su cónyuge que aquél fallecido en circunstancias falsas. Por lo anterior, solicita invalidar la sentencia de segundo grado y se dicte sentencia de reemplazo que lo condene



como autor del delito de secuestro agravado en la persona de Manuel Sanhueza Mellado.

Tercero: Que, el Programa recurre de casación en el fondo, fundando su arbitrio, en primer lugar, en la causal contenida en el artículo 546, N° 4 del código adjetivo, en torno a una calificación que estima errada en lo que respecta a la forma de autoría, en lo concerniente al delito de secuestro calificado, en la hipótesis comisiva prevista en el artículo 15, N° 3 del código de castigo, respecto a la decisión de absolución del encausado Enrique Fuenzalida Puelma.

Como segunda causal, invoca la contenida en el artículo 546, N° 7 del compendio adjetivo, en relación a los artículos 488, N°s 1 y 2, y 485 del mismo cuerpo legal. El análisis de la causal en estudio lo es en términos análogos a lo argumentado en razón del recurso descrito en el motivo anterior, respecto de las presunciones judiciales que demuestran la participación de Fuenzalida Puelma en los hechos investigados, resultando clave atender a la diversidad de funciones, dado que —en concepto de la articulista— fue la decisión del encausado lo que posibilitó el encierro de la víctima, calidad en que se encontraba al momento de ser ejecutado, así como su conducta funcional, unido al objetivo preciso de las fuerzas policiales de eliminar a personas con las características de la víctima.

Por lo anterior, solicita invalidar la sentencia y se dicte sentencia de reemplazo que condene a Fuenzalida Puelma, en calidad de coautor del delito de secuestro calificado, al máximo de la pena señalada en la ley, con costas.

Cuarto: Que, el Consejo de Defensa del Estado sustenta la casación en el fondo en la causal prevista en el numeral 4°, del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, refiriendo que esta causal sustantiva, como lo exige la



jurisprudencia en su concepto, debe ser complementada con la segunda causal en la cual sustenta su arbitrio, la cual es una causal adjetiva. Lo anterior, dado que la sentencia que impugna ha calificado como lícito un hecho que la ley pena como delito, y en dicho orden de ideas, ha resuelto mantener la decisión de absolución del encartado Fuenzalida Puelma.

Asimismo, invoca la causal descrita en el artículo 546, N° 7, del código adjetivo, toda vez que en concepto de la articulista, la decisión de segundo grado ha vulnerado las leyes reguladoras de la prueba, reglas contenidas en los artículos 459, 477 y 488, numerales N° 1 y 2 del mismo cuerpo legal, en tanto el fallo de segunda instancia mantuvo la decisión de absolución respecto al encausado Enrique Fuenzalida Puelma, vulnerándose con ello las referidas normas. Expone que el tribunal *ad quem* no valoró el cúmulo de elementos de convicción, los cuales en su conjunto permiten acreditar la participación punible que le asistió en el delito imputado, todo lo cual quedó demostrado en autos conforme el mérito de la prueba testimonial, documental y el conjunto de presunciones.

Estima que, al no haberse otorgado un valor probatorio adecuado a los antecedentes de cargo reunidos, se desatiende la construcción de una presunción judicial que permita acreditar su participación, fundada en hechos reales y probados, razón por la cual solicita invalidar la sentencia de segundo grado y se dicte sentencia reemplazo que condene a Enrique Fuenzalida Puelma como autor del delito de secuestro calificado en la persona de Manuel Sanhueza Mellado.

Quinto: Que, como se consigna en el motivo segundo de la sentencia de primer grado —reiterado en el fallo de alzada—, los sentenciadores del fondo tuvieron por demostrados los siguientes hechos:



“a. Que, la víctima de autos Manuel Sanhueza Mellado es detenido el 10 de julio de 1974, en su domicilio ubicado en la Población ‘Venceremos’ de la ciudad de Arica, junto a su cónyuge Cecilia Linoska Rojas Orellana, por agentes de civil, uno de los cuales se habría identificado como Luis Carrera, aduciendo pertenecer al Servicio de Inteligencia Militar, posteriormente el matrimonio es trasladado en un jeep al Regimiento Rancagua de esa ciudad y en ese lugar se les separa. En esa misma fecha se detiene a su suegro, Orlando Rojas Vergara y a su cuñada Nieves Berta Rojas Orellana, al ser acusados de ser comunistas y también son trasladados al Regimiento. El día 12, son puestos a disposición del Fiscal Militar;

b. Que, posteriormente, el día 27 de julio de 1974, Sanhueza Mellado, su suegro Orlando Rojas y Raúl Patricio Poblete son trasladados en un vehículo desde el Regimiento Rancagua de Arica hasta el campamento de prisioneros de guerra de Pisagua, bajo la vigilancia de una patrulla militar al mando de un oficial, una vez en la localidad de Pisagua, en el Retén de Carabineros, antes de ser trasladados al Campo de Prisioneros, los tres detenidos son encerrados en calabozos diferentes;

c. Que, alrededor de las 09:00 horas del día siguiente, militares retiran de su encierro a Orlando Rojas Vergara y a Raúl Patricio Poblete, les suben a un camión y en los momentos en que se aprestaban a continuar la marcha hacia el campo de prisioneros, se percatan sus parientes de la ausencia de Manuel Sanhueza Mellado y le advierten al oficial, este entonces vuelve a la unidad policial para consultar, pero al regresar señala que la orden solamente se refería a ellos dos; y,



d. Que, el señalado Retén de Carabineros de Pisagua sería el último lugar donde se tuvo noticias de la víctima Sanhueza Mellado, hasta que en el mes de junio del año 1990, sus restos son encontrados en una fosa común clandestina cercana al cementerio de la localidad de Pisagua, donde fue identificado y se determina que la causa de su muerte, según Protocolo de autopsia N° 059/90, es de heridas a bala en el tórax”.

Estos hechos fueron calificados en primera instancia como constitutivos de los delitos de secuestro y homicidio calificado, descritos y sancionados en los artículos 141 y 391, N° 1 del Código Penal, al haberse actuado en este último con alevosía y premeditación conocida, calificación que fue modificada en la motivación tercera del fallo de segundo grado, en el entendido que tales hechos encuentran una mejor tipificación en el delito de secuestro calificado, descrito y sancionado en el artículo 141 del Código Penal, en la redacción vigente a la época de los hechos, al referirse a una víctima que fue ilícitamente privada de su libertad, sin orden judicial que la justificara, encierro que se prolongó por más de noventa días y por el grave daño causado en la persona del secuestrado, toda vez que por mucho tiempo no se tuvieron señales de su paradero, y sólo en el año 1990 se lograron ubicar sus restos, en una fosa común clandestina, en las cercanías de Pisagua.

Sexto: Que en primer lugar, se analizarán los recursos de casación sustancial dirigidos en contra del capítulo criminal de la sentencia en estudio, para luego abordar la casación formal contra el acápite civil del fallo impugnado.

Séptimo: Que tanto en el arbitrio propuesto por el Programa, como por el Consejo de Defensa del Estado, se invoca la causal contenida en el numeral 4º,



del artículo 546 del código de enjuiciamiento criminal, la cual expresa que se autoriza el presente recurso procesal en el evento que la errónea aplicación de la ley penal se traduzca en que la sentencia califique como lícito un hecho que la ley pena como delito y, en consecuencia, absuelva al acusado.

Octavo: Que del estudio del fallo, se trasunta que la absolución del encausado Enrique Fuenzalida Puelma de la imputación de ser responsable, a título de autor, del delito de secuestro calificado en la persona de Manuel Sanhueza Mellado, obedeció a una razón distinta a la sostenida a propósito de la causal de impugnación en estudio.

En este orden de ideas, ilustrativo resulta revisar el motivo décimo del fallo de primera instancia, donde el sentenciador declara que los antecedentes probatorios acumulados durante la investigación, si bien son demostrativos de una participación en el mes de julio de 1974, como Fiscal Militar y de Carabineros de Arica, fecha en que es secuestrado Manuel Eduardo Sanhueza Mellado, no son bastantes ni concluyentes para vincularlo, directa o indirectamente, con los ilícitos que se cometieron en contra de la víctima, toda vez que lo expresado por su cónyuge en torno a una diligencia de careo, presuntamente realizada en el mes de julio de ese año, resulta del todo feble para determinar que le hubiese asistido una participación culpable, ya sea como autor, cómplice o encubridor, no logrando advertirse en la investigación su intervención en la detención ni tampoco en el traslado de la víctima y, al contrario, es quien asume la responsabilidad de entregarle la noticia de su fallecimiento a la familia, de acuerdo a lo que falazmente se le informa desde Iquique, por lo que al juzgador le deja una duda, más que razonable, de su efectiva participación.



Este razonamiento fue compartido en el fallo pronunciado por el *ad quem*, el cual en su motivación décima ratifica su decisión de absolución, teniendo presente para ello que, de acuerdo al artículo 456 bis del Código de Procedimiento Penal, nadie puede ser condenado por delito sino cuando el tribunal que lo juzgue haya adquirido, por los medios de prueba legal, la convicción de que realmente se ha cometido un hecho punible y que en él le ha correspondido al reo una participación culpable y penada en la ley, presupuestos que no se cumplen a su respecto en orden a ser considerado como responsable en los hechos investigados.

Noveno: Que de lo expuesto queda en evidencia que, a diferencia de lo planteado en este acápite por los recursos, Fuenzalida Puelma no fue absuelto por los jueces del fondo porque estimasen que los hechos acreditados no fuesen constitutivos de delito, sino porque no pudo acreditarse hechos que importasen una participación culpable del acusado, en el delito de secuestro calificado en la persona de Manuel Sanhueza Mellado.

Según lo expuesto y tratándose de un recurso de derecho estricto la causal invocada del N° 4, del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal no puede prosperar, al fundar como motivo de absolución una razón que no se condice con el mérito de la sentencia atacada puesto que, como se dijo, los jueces del fondo no manifestaron que los hechos acreditados no configuraran el delito de secuestro calificado, por el contrario, subsumieron los hechos en el tipo penal referido —y que, precisamente, se tradujo en la condena de los coencartados—, sin perjuicio que al analizar la participación de Fuenzalida Puelma, no arribaron a la convicción de condena por falta de elementos inculpatórios que permitieran atribuirle



intervención punible en el ilícito, razón por la cual se desestimarán los recursos en lo que respecta a la causal en estudio.

Décimo: Que, en torno a la causal de invalidación propuesta tanto en el recurso de casación en el fondo de la parte querellante, como en los deducidos por el Programa y el Consejo de Defensa del Estado, fundado en la causal contenida en el artículo 546, N° 7 del código adjetivo, defendiéndose la infracción del artículo 488 del Código de Procedimiento Penal, norma que establece diversos extremos para que las presunciones judiciales puedan constituir prueba completa de un hecho, en este caso, de la participación del encartado en el delito objeto de la sentencia.

De dichos extremos, esta Corte ha aclarado que sólo constituyen normas reguladoras de la prueba, que pueden ser revisadas, en sede de casación, la contenida en el ordinal 1°, esto es, que las presunciones judiciales se funden en hechos reales y probados y no en otras presunciones, sean legales o judiciales; y, del ordinal 2°, la exigencia de multiplicidad de ellas. Los demás extremos, esto es, que las presunciones sean graves; precisas, de tal manera que una misma no pueda conducir a conclusiones diversas; directas, de modo que conduzcan lógica y naturalmente al hecho que de ellas se deduzca; y que las unas concuerden con las otras, de manera que los hechos guarden conexión entre sí, e induzcan todas, sin contraposición alguna, a la misma conclusión de haber existido el hecho de que se trata, no pueden considerarse reglas reguladoras de la prueba, ya que queda entregado a los jueces de la instancia afirmar o negar su cumplimiento como resultado de un ejercicio de ponderación y valoración del conjunto de las



presunciones judiciales, cuestión que les es privativa a los sentenciadores del grado y que no puede ser controlado por esta Corte.

Undécimo: Que, asentado lo anterior si bien los articulistas citan la sección del precepto que reviste la condición de norma reguladora de la prueba — numerandos 1° y 2°—, la lectura de los recursos no demuestra la imputación de haberse vulnerado tal disposición pues, para fundamentar sus reclamaciones, citan una determinada cantidad de elementos probatorios reunidos en la causa, los que, en concepto de las impugnantes, satisfarían las exigencias de la ley procesal penal para producir prueba. Sin embargo, omiten explicar a este Tribunal de Casación la forma concreta en que los jueces, que valoraron esos antecedentes, habrían incurrido en infracción de ley al no otorgarles el mérito de las presunciones judiciales que se aseveran existentes, tarea que en un recurso de derecho estricto es de cargo de quien lo interpone y no de la Corte encargada de conocerlo y resolver sobre lo pedido.

Es de toda evidencia que respecto de los requisitos “hechos reales y probados” y “múltiples”, no puede entenderse demostrada su concurrencia, a través del mero relato de determinadas piezas del proceso, omitiendo el raciocinio lógico dirigido a poner de manifiesto en el escenario procesal, el apartamiento de los jueces de las normas legales respectivas, que es el supuesto indispensable para el ejercicio de las facultades de una Corte de Casación, encargada de velar por la correcta aplicación de la ley. En consecuencia, no lográndose una alteración del sustrato fáctico establecido por los sentenciadores del fondo, tampoco logra configurarse el yerro propuesto en relación a las normas sobre participación de los acusados en el delito investigado.



Duodécimo: Que, el Mensaje del Código de Procedimiento Penal consigna como una base general y superior a toda demostración jurídica, que la convicción del juez adquirida por los medios de prueba legal es de todo punto indispensable para condenar. Si esa convicción no llega a formarse, el juez podrá absolver sin otro fundamento y cualesquiera que sean los antecedentes que el proceso arroje en contra del reo. En correspondencia con ello el artículo 456 bis —originalmente 456— del texto normativo dispone que *“Nadie puede ser condenado por delito sino cuando el tribunal que lo juzgue haya adquirido, por los medios de prueba legal, la convicción de que realmente se ha cometido un hecho punible y que en él ha correspondido al procesado una participación culpable y penada por la ley”*.

Esa labor de revisión del proceso no es jurídica, sino de hecho, propia de un tribunal de instancia, no revisable por vía de casación, razón por la cual los recursos en estudio deberán ser desestimados.

Decimotercero: Que, en lo que respecta al recurso de casación formal, deducido en contra del capítulo civil de la sentencia de segunda instancia, según la constante jurisprudencia de esta Sala, tiene un carácter esencialmente objetivo y para pronunciarse acerca de su procedencia basta el examen externo del fallo a fin de constatar si existen o no los requerimientos que le compele la ley.

Como se advierte del libelo de nulidad, se reprocha a los jueces de alzada el no haber analizado los argumentos planteados por los demandantes civiles, ni fundar su decisión para decidir mantener los montos a fijar por concepto de indemnización por daño moral para cada una de las demandantes.

Decimocuarto: Que, de la atenta lectura de la sentencia impugnada, aparece que ella intenta desvirtuar lo propuesto por las actoras en su recurso de



casación con el propósito de mantener el quantum de las indemnizaciones otorgadas en primera instancia. Sin embargo, tal intento omite las consideraciones que permitan concluir el por qué se opta por mantener lo otorgado en primera instancia.

Decimoquinto: Que, la omisión de razonamiento anotada por parte de la sentencia de segundo grado, permite concluir que, al momento de ratificar el capítulo civil de la sentencia de primera instancia, dado lo argumentado por las actoras en su apelación, no se cumplió con el requisito contemplado en el artículo 170 N° 4 del código de enjuiciamiento civil, quedando la decisión de mantener la indemnización por concepto de daño moral desprovista de justificación.

En tales condiciones, en esta sección, la sentencia recurrida queda incurso en el motivo de casación formal esgrimido, el que sólo puede subsanarse con la invalidación de la sentencia que lo contiene, asumiendo esta Corte la obligación de dictar el correspondiente fallo de reemplazo.

Decimosexto: Que, atendido el fallecimiento del sentenciado Manuel Gregorio Caballero Villanueva, acaecido el 25 de agosto de 2022, se omite pronunciamiento respecto a la casación sustancial promovida a su respecto.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 535, 541, 546 y 547 del Código de Procedimiento Penal; y 767 y siguientes del de Procedimiento Civil, se decide:

I. Que **se rechazan** los recursos de casación en el fondo, deducidos por las querellantes, el Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Consejo de Defensa del Estado, en contra de la decisión



penal de la sentencia de veintiocho de julio de dos mil veinte, escrita a fojas 2.846 y siguientes, capítulo que consecuencialmente, no es nulo.

II. Que **se acoge** el recurso de casación en la forma deducido en el segundo otrosí de la presentación del abogado don Adil Brkovic Almonte, en contra de la sección civil de la referida sentencia, la que se anula y se la reemplaza por la que se dicta a continuación, sin nueva vista pero separadamente.

III. Que **se omite** pronunciamiento respecto del recurso de casación en el fondo deducido en favor del sentenciado, hoy fallecido, Manuel Gregorio Caballero Villanueva.

Se previene que el abogado integrante Sr. Morales estuvo por rechazar el recurso de casación en la forma, en atención a que los fundamentos sobre la base de los cuales fue fijado el monto de las indemnizaciones se encuentra en la sentencia de primera instancia; que los considerandos 15, 19, 20 y 21 de la sentencia de segunda instancia se limitan a complementar normativamente la decisión de primer grado, para confirmar lo resuelto; que, de acuerdo con el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, para rechazar un recurso de apelación y confirmar la decisión recurrida no es necesario que la sentencia de segunda instancia cuente con fundamentos adicionales sino que basta que ésta tenga por reproducidas los del fallo en revisión; que, en este entendido, el vicio que afecta a la decisión que por esta vía se cuestiona, se encuentra en la sentencia de primera instancia; que, en contra de tal decisión, no se dedujo recurso de casación en la forma, de modo tal que aquel deducido en contra de la sentencia de segunda instancia no puede prosperar al no haber sido debidamente preparado.



Regístrese.

Redacción a cargo de la Ministra Sra. Letelier y, de la prevención, por su autor.

N° 125.650-2020.

Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros Sres. Haroldo Brito C., Manuel Antonio Valderrama R., Jorge Dahm O., Sra. Maria Teresa Letelier R., y el Abogado Integrante Sr. Eduardo Morales R. No firma el Ministro Sr. Brito, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por haber cesado de sus funciones.

MANUEL ANTONIO VALDERRAMA
REBOLLEDO
MINISTRO
Fecha: 01/12/2023 14:08:24

JORGE GONZALO DAHM OYARZUN
MINISTRO
Fecha: 01/12/2023 14:08:25

MARIA TERESA DE JESUS LETELIER
RAMIREZ
MINISTRA
Fecha: 01/12/2023 14:08:26

EDUARDO VALENTIN MORALES
ROBLES
ABOGADO INTEGRANTE
Fecha: 01/12/2023 14:47:38



En Santiago, a uno de diciembre de dos mil veintitrés, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente, como asimismo personalmente al Fiscal Judicial de la Corte Suprema, quien no firmó.



Sentencia de reemplazo.

Santiago, uno de diciembre de dos mil veintitrés.

En cumplimiento de lo ordenado por el fallo de casación que antecede y lo prescrito en los artículos 535 y 544 del Código de Procedimiento Penal, se dicta la siguiente sentencia de reemplazo.

Vistos:

Se reproduce de la sentencia en alzada, de veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho, escrita a fojas 2.524 y siguientes.

Se mantiene el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, de veintiocho de julio de dos mil veinte, y que obra a fojas 2.846 y siguientes, con excepción de sus motivaciones octava, novena y decimonovena a vigesimoprimera, las cuales se eliminan.

Y se tiene, en su lugar y además presente:

1º) Que, en cuanto a lo demandado a título de indemnización por daño moral, se tiene presente que la jurisprudencia reiterada de esta Corte afirma que éste es la lesión efectuada culpable o dolosamente, que acarrea molestias en la seguridad personal del afectado, en el goce de sus bienes o en un agravio a sus afecciones legítimas, de un derecho subjetivo de carácter inmaterial e inherente a la persona e imputable a otra. Este daño sin duda no es de naturaleza propiamente económica y no implica, en consecuencia, un deterioro o menoscabo real en el patrimonio de aquel, susceptible de prueba y determinación directa; sino que posee una naturaleza eminentemente subjetiva.

Así, atendida esta particularidad, no pueden aplicarse para precisar su existencia las mismas reglas que las utilizadas para la determinación de los daños materiales, que están constituidos por hechos tangibles y concretos, que



indudablemente deben ser demostrados, tanto en lo que atañe a su especie como a su monto.

2º) Que, la comprobación de la transgresión o agravio del derecho subjetivo envuelve *per se*, la prueba de la efectividad del daño moral, de manera que acreditada la calidad de víctima de violaciones a los derechos humanos, respecto del cónyuge y hermano de las demandantes, por agentes del Estado, forzoso es concluir que se ha producido dicho perjuicio y que debe ser reparado, lo que no podría ser de otra forma en tanto que materialmente es difícil, por no decir imposible, medir con exactitud la intensidad con que esas violaciones han afectado a las demandantes, por la naturaleza del perjuicio producido, de todo lo cual se concluye que, este tipo de menoscabo, no requiere ser fundamentado ni probado en la forma alegada, considerando, como se ha dicho, el carácter moral que reviste.

En efecto, la naturaleza e intensidad del dolor no hace indispensable la prueba sobre el mismo, por tratarse de un hecho evidente en cuanto a que las violaciones a los derechos de una persona, en el contexto institucional de la época, a manos de agentes del Estado, produce sufrimiento a su entorno familiar, lo que no requiere de evidencia, daño que debe ser indemnizado, tomando en cuenta todos los antecedentes reunidos y debiendo hacerse sobre el particular una apreciación equitativa y razonable por el tribunal.

3º) Que, la naturaleza del daño moral de que se trata, obliga a que la determinación del monto dinerario que permita de algún modo reparar, mitigar o ayudar a sobrellevar el dolor causado por el hecho ilícito asentado, necesariamente lleva a que su determinación sea realizada prudencialmente, ante la necesidad de fijar con exactitud y certeza la suma que sirva a esos objetivos, no lleva a que esa evaluación sea arbitraria o antojadiza, sino, por el



contrario, que ante la carencia de normas que prevengan fórmulas, pautas o métodos uniformes y universales para todo tipo de situaciones, el tribunal debe analizar cada caso en base a sus especificidades y particularidades, sopesándolas con cautela, moderación, fundándose en los principios de equidad, a los que alude el numeral 5°, del artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, lo que sin duda le entrega mayor flexibilidad para dicha determinación, sin que tal ejercicio implique en modo alguno liberarlo del deber de expresar las razones que llevaron a esa decisión, toda vez que de ese modo se justifica lo que se manda a pagar por el fallo.

4°) Que no es discutido en el proceso, que doña Cecilia Linoska Rojas Orellana, era cónyuge de la víctima Manuel Sanhueza Mellado y que doña Gladys Sanhueza Mellado y doña Olivia Rosa Sanhueza Mellado, eran sus hermanas.

5°) Que si bien, el fallo de primer grado otorgó parcialmente la indemnización solicitada respecto a cada una de las demandantes, no puede ser homologable ni equiparable la aflicción espiritual ocasionada en la cónyuge de la víctima, con aquella experimentada por sus hermanas, dado que con la primera se conforma un proyecto de vida que queda trunco con ocasión del delito de secuestro calificado y, posterior desaparición hasta el hallazgo de sus restos mortales en 1990, en tal entendido, su cuantía debe ser regulada en un monto atendiblemente mayor que aquel que se establezca en favor de sus hermanas.

6°) Que sin embargo, y en relación a las hermanas de la víctima, el monto fijado por los sentenciadores de segunda instancia, resulta condigno y acorde con otros fijados por esta Corte, de manera que se mantendrán en el mismo guarismo decretado en la sentencia recurrida.



Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 1, 7, 14, 15, 16 y 141 del Código Penal, 13, 514 y 527 del Código de Procedimiento Penal, artículos 178, 180 y 186 del Código de Procedimiento Civil, en relación a los artículos 5, 6, 38 y 19, N° 24 de la Constitución Política de la República, se decide:

A.- En el aspecto penal:

I.- Que **se confirma** en lo apelado y **se aprueba** en lo consultado, la sentencia impugnada de primera instancia, de veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho, escrita a fojas 2.524 y siguientes.

B.- En su acápite civil:

II.- Que **se revoca** la referida sentencia, en aquella parte que condenó en costas al Fisco de Chile y, en su lugar, se declara, que éste **queda liberado** del pago de las mismas, por haber tenido motivos plausibles para litigar.

III.- Que **se confirma**, en lo demás, la aludida sentencia, **con declaración** que se aumenta el monto ordenado pagar a doña **Cecilia Linoska Rojas Orellana**, por concepto de daño moral, a la suma de **\$100.000.000** (cien millones de pesos).

IV.- Que, las sumas que se ordena pagar, lo serán con los reajustes e intereses establecidos en la sentencia de primer grado.

Atendido el fallecimiento del sentenciado **Manuel Gregorio Caballero Villanueva**, acaecido el 25 de agosto de 2022, **se omite** pronunciamiento de la decisión del fondo a su respecto, debiendo el señor Ministro en Visita Extraordinaria pronunciar las resoluciones que en derecho correspondan.

Regístrese y devuélvase, con sus tomos y agregados.

Redacción a cargo de la Ministra Sra. Letelier.

N° 125.650-2020.



Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros Sres. Haroldo Brito C., Manuel Antonio Valderrama R., Jorge Dahm O., Sra. Maria Teresa Letelier R., y el Abogado Integrante Sr. Eduardo Morales R. No firma el Ministro Sr. Brito, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por haber cesado de sus funciones.

MANUEL ANTONIO VALDERRAMA
REBOLLEDO
MINISTRO
Fecha: 01/12/2023 14:08:28

JORGE GONZALO DAHM OYARZUN
MINISTRO
Fecha: 01/12/2023 14:08:28

MARIA TERESA DE JESUS LETELIER
RAMIREZ
MINISTRA
Fecha: 01/12/2023 14:08:29

EDUARDO VALENTIN MORALES
ROBLES
ABOGADO INTEGRANTE
Fecha: 01/12/2023 14:47:40



En Santiago, a uno de diciembre de dos mil veintitrés, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente, como asimismo personalmente al Fiscal Judicial de la Corte Suprema, quien no firmó.

